



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

Señores:

Juzgados Administrativos del Circuito de Buga (Reparto)

Buga Valle

REFERENCIA: Acción de Reparación Directa.

Demandantes: JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA, BLANCA INES CAMACHO OSPINA, XIOMARAFRANCO CAMACHO, CAMILA CAMACHO OSPINA, VALERIA ACEVEDO CAMACHO, BRAYAN DAVID CAMACHO OSPINA, ISABELA CAMACHO OSPINA; y DUVAN ANDRES CAMACHO OSPINA.

Demandados: LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVADE LA ADMINISTRACION JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON, mayor de edad y vecino de Tuluá Valle, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional No125.089 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de los señores **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, identificado con la Cédula De Ciudadanía **No 1.006.432.563** de Tuluá Valle, víctima directa del perjuicio, quien actúa en nombre propio; **BLANCA INES CAMACHO OSPINA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No **38.791.538** de Tuluá Valle, obrando en su propio nombre como madre de la víctima directa del daño y en representación de sus menores hijos **XIOMARAFRANCO CAMACHO, CAMILA CAMACHO OSPINA, VALERIA ACEVEDO CAMACHO, BRAYAN DAVID CAMACHO OSPINA y ISABELA CAMACHO OSPINA**; y de otro lado **DUVAN ANDRES CAMACHO OSPINA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 1.006.426.315 de Tuluá Valle, en su condición de hermano de la víctima directa del daño, con el debido respeto concurro ante su Despacho para presentar **DEMANDA DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA**, contemplada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra **LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL- DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y FISCALIA GENERAL DE LA NACION**; Entidades representadas legalmente así: Por el Doctor **JUAN MANUEL SANTOS**, por su Directora ejecutiva, Doctora, **FELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ** o por quien haga sus veces al momento de la notificación de la demanda y por el Doctor **NESTOR HUMBERTO MARTINEZ**, o por quien haga sus veces al momento de la notificación de este medio de control, todos mayores y con domicilio en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, para que previos los trámites del proceso ordinario y surtido con citación y audiencia del Procurador Judicial, para que en sentencia de mérito que haga tránsito a cosa juzgada se pronuncien las pretensiones que adelante formularé.



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

PARTES PROCESALES y CALIDAD EN QUE ACTUAN.

DEMANDANTES

El señor **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, víctima directa del perjuicio, quien actúan en nombre propio, **BLANCA INES CAMACHO OSPINA**, obrando en su propio nombre como madre de la víctima directa del daño y en representación de sus menores hijos **XIOMARA FRANCO CAMACHO, CAMILA CAMACHO OSPINA, VALERIA ACEVEDO CAMACHO, BRAYAN DAVID CAMACHO OSPINA y ISABELA CAMACHO OSPINA**; y **DUVAN ANDRES CAMACHO OSPINA** en su condición de hermano de la víctima directa del daño.

DEMANDADOS

LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL, representada legalmente por la Doctora **FELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ**, o por quien haga sus veces.

FISCALIA GENERAL DE LA NACION, representada legalmente por el doctor **NESTOR HUMBERTO MARTINEZ**, o por quien haga sus veces.

PARTES INTERVINIENTES:

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El Procurador Judicial ante esta Honorable Corporación.

I. DECLARACIONES Y CONDENAS

1.1.-Se declare que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y FISCALIA GENERAL DE LA NACION, son solidarios y responsables administrativamente de los daños y perjuicios causados a mis poderdantes **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA, BLANCA INES CAMACHO OSPINA, XIOMARA FRANCO CAMACHO, CAMILA CAMACHO OSPINA, VALERIA ACEVEDO CAMACHO, BRAYAN DAVID CAMACHO OSPINA, ISABELA CAMACHO OSPINA**; y **DUVAN ANDRES CAMACHO OSPINA**, con ocasión de la detención injusta que fuera objeto y sufriera el joven **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, desde el día ocho (08) de febrero del año dos mil catorce (2014) hasta el día veintiséis (26) de diciembre de la misma anualidad, fecha en la cual se decretó la Incompetencia del Juzgado por cuanto la ocurrencia de los hechos materia de investigación se dieron en virtud de que el implicado era menor de edad y dispuso la libertad inmediata, decisión que fue confirmada por el Honorable Tribunal de Buga Valle.



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

1.2- Como consecuencia de la anterior declaración se condene a las entidades demandadas a pagar a los demandantes los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) e inmateriales (perjuicios morales), estimados como mínimo en la suma de **TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILCINCUENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE (\$320.689.051)** pesos, los cuales discriminaré en el siguiente acápite.

1.3- La NACIÓN – RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y FISCALIA GENERAL DE LA NACION darán cumplimiento a la sentencia y actualizarán la condena respectiva de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A., hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso.

II. DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LOS ACCIONANTES.

2.1. LOS PERJUICIOS MATERIALES: DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

Los perjuicios se ocasionaron como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima directa el señor **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, por un lapso de 322 días.

2.1.1. DAÑO EMERGENTE

El daño emergente está constituido por el dinero que tuvieron que desembolsar mis poderdantes por concepto de pago de honorarios de abogado a raíz de la injusta privación de la que fueron objeto por parte de las entidades accionadas, este concepto hacer relación a los honorarios profesionales para cumplir con la adecuada defensa técnica de sus intereses dentro del respectivo proceso penal que se adelantó en su contra, por la gravedad del delito que se le imputaba. Daño emergente que lo estimo en la suma de diez millones de pesos (\$10.000.000). Suma que debe ser indexada.

2.1.2. LUCRO CESANTE

El Lucro Cesante está constituido por el dinero que mi representado dejó de percibir durante todo el tiempo que estuvo privado de su libertad, es decir, del día 08 de febrero del año 2014 hasta el día 26 de diciembre de la misma anualidad, fecha en la que se decretó la Incompetencia del Juzgado por cuanto la ocurrencia de los hechos materia de investigación se dieron en virtud de que el implicado era menor de edad y dispuso la libertad inmediata, decisión que fue confirmada por el Honorable Tribunal de Buga Valle.

Para el señor **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, quien al momento de su injusta detención derivaba su manutención y la de su familia de la actividad que desempeñaba como agricultor es decir, laborando en actividades agrícolas propias



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

del campo en el corregimiento de Moralia Jurisdicción del municipio de Tuluá Valle, en la suma de \$8.595.253,33 pesos, la cual se deduce de lo siguiente: El salario mínimo legal mensual para la fecha de la privación de la libertad, es decir, para el 2014 equivalía a \$616.000, más el 30% por concepto de prestaciones sociales es decir, \$184.800, lo cual suman un total mensual de \$800.800 pesos, lo que equivale a un salario diario de \$26.693, 33 pesos y como durante ese año estuvo 322 días privado de su libertad esto nos da un total de \$8.595.252,26 pesos.

Se deberá estimar igualmente que en este caso en concreto se disminuyó totalmente la expectativa laboral y económica para él, por cuanto con un señalamiento tan grave como el que le hicieron, el demandado no pudo emplearse por un largo periodo de tiempo, además su prestigio adquirido durante largos años de trabajo fue mancillado y destruido a consecuencia del hecho antijurídico dañino, es decir, su “GoodWill” o buen nombre quedo seriamente cuestionado, por consiguiente acorde con la Jurisprudencia del Consejo de Estado en cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala del Honorable Consejo de Estado se ha valido de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8,75 meses), para un total de \$7.006.999,12 pesos.

262,5 días x \$26.693,33= \$7.006.999,12 pesos.

La anterior indemnización contempla dos partes: la debida o consolidada y la futura o anticipada, para la cual se deberá aplicar las fórmulas que para tal efecto han venido aplicando tanto los Tribunales, Jueces y el Consejo de Estado, previa actualización de los ingresos.

2.2. PERJUICIOS MORALES

Como se sabe, los perjuicios morales son objetivados y subjetivados. Los primeros son todos los daños resultantes de las manifestaciones económicas a causa de las angustias o trastornos psíquicos que sufrieron mis representadospoderdantesvíctima directa del perjuicio y su grupo familiar: **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA, BLANCA INES CAMACHO OSPINA, XIOMARA FRANCO CAMACHO, CAMILA CAMACHO OSPINA, VALERIA ACEVEDO CAMACHO, BRAYAN DAVID CAMACHO OSPINA, ISABELA CAMACHO OSPINA;** y **DUVAN ANDRES CAMACHO OSPINA,** como consecuencia de tener que soportar un daño antijurídico, consistente en la privación injusta de la libertad durante un lapso de tiempo que duró 322 días y la incertidumbre de estar privado del segundo derecho fundamental por excelencia como es la libertad, pues se mantuvo esta familia durante un estado de zozobra en el tiempo que duro la detención, con las implicaciones y consecuencia de todo orden que ello representa.

Los impactos sentimentales y afectivos también alcanzaron el plano externo o de la productividad, porque a pesar de que **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA,** fue absuelto sigue viviendo el rechazo de gran parte de la comunidad, lo que le ha



traído dificultades para reiniciar su actividad laboral. Esos daños morales objetivados no solo los sufrieron la víctima directa del perjuicio, sino también sus parientes cercanos como su madre y hermanos menores a quienes no pudo ver durante largo tiempo.

En cuanto a los segundos o perjuicios morales subjetivados, son los perjuicios que exclusivamente lesionan los aspectos sentimentales, que originan angustias, dolores internos, psíquicos, es el dolor o angustia que se siente y que por ser tan difícil de definir se ha dado por llamar pretiumdoloris o precio del dolor **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA** y su grupo familiar sufrieron ese precio del dolor de manera profunda durante el tiempo que este estuvo injustamente privado de su libertad, se privó a sus menores hermanos de la compañía, al igual que a su madre, su madre y hermanos sufrieron el dolor de ver a su hijo y hermano tras las rejas estigmatizado por la sociedad y tuvieron que trabajar duro para sostener el hogar y la manutención debida a que el perjudicado directo era el hijo mayor y sostenimiento del hogar.

Teniendo en cuenta el tiempo de detención que tuvo que soportar **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA** de 322 días, se estima el daño moral por el sufrido en la suma de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual manera se estima en (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su madre; y (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de sus hermanos.

3. LOS PERJUICIOS SE SINTETIZAN ASÍ:

3.1. PARA JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA

Perjuicios materiales:

| | |
|---|-----------------------|
| Daño emergente: | \$10.000.000 pesos. |
| Lucro cesante: | \$15.602.251,4 pesos. |
| Perjuicios morales: 80 SMLM = | \$59.017.360 pesos. |
| Total, perjuicios para JUAN CAMILO : | \$84.619.611,4 pesos. |

3.2. PARA SU MADRE BLANCA INES CAMACHO OSPINA.

Perjuicios morales: 80 SMLM = \$59.017.360 pesos.

3.3. PARA SU HERMANA XIOMARA FRANCO CAMACHO.

Perjuicios morales: 40 SMLM = \$29.508.680 pesos.

3.4. PARA SU HERMANA CAMILA CAMACHO OSPINA.

Perjuicios morales: 40 SMLM = \$29.508.680 pesos.

3.5. PARA SU HERMANA VALERIA ACEVEDO CAMACHO.

Perjuicios morales: 40 SMLM = \$29.508.680 pesos.

3.6. PARA SU HERMANO BRAYAN DAVID CAMACHO OSPINA.



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

Perjuicios morales: 40 SMLM = \$29.508.680 pesos.

3.7. PARA SU HERMANA ISABELA CAMACHO OSPINA.

Perjuicios morales: 40 SMLM = \$29.508.680 pesos.

3.8. PARA SU HERMANO DUVAN ANDRES CAMACHO OSPINA.

Perjuicios morales: 40 SMLM = \$29.508.680 pesos.

3.9. TOTAL, PRETENSIONES:

En total las pretensiones al momento de presentar demanda las estimo en la suma de trescientos veinte millones seiscientos ochenta y nueve mil cincuenta y un mil (\$320.689.051) pesos.

III. HECHOS Y OMISIONES EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA.

PRIMERO: Se inicia investigación penal en contra del joven **JUANCAMILO CAMACHO OSPINA** teniendo como base información y elementos materiales probatorios suministrados a las autoridades por el señor **JOSE GERARDO BUENO BUENO** denominado con el alias de “**peligro**”, el cual una vez se entrega a las autoridades manifiesta pertenecer desde el año 2005 a la organización criminal “**los rastros**”, quien ocupaba el cargo de pagador al interior de la mencionada organización criminal.

SEGUNDO: La investigación fue adelantada por la Fiscalía 24 **UNAIM** de Cali Valle, bajo el radicado **110016000098200980160**, determinándose en el curso de la investigación que mi poderdante **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, perteneció a la banda denominada “**Los Rastros**”, que operaba en el norte del valle, entre los años 2007 y 2008, sin advertir que mi poderdante inició y culminó su supuesto actuar delictivo cuando era menor de edad, tal como se desprende de las entrevistas rendidas por el señor **JOSE GERARDO BUENO BUENO, HERRERA BALLESTAS** alias “**el mono o costeño**” y **AGUDELO ECHEVERRY**, alias “**tata**”, se concluyó igualmente por parte de los investigadores que la mencionada banda criminal operaba por los sitios de Trujillo, La Sonora, Andinópolis, Betania, Naranjal, Primavera, La Zulia, Venecia, Salónica, Riofrio, Cristales, entre otros municipios, veredas y corregimientos del Centro del valle del Cauca.

TERCERO: Como consecuencia de esta investigación la Fiscalía General de la Nación con fundamento en los elementos materiales probatorios y evidencia física obtenida, a través de su delegado solicita se libre orden de captura en contra de **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, por ser presuntamente responsable del punible de Concierto Para Delinquir Agravado.

CUARTO: El día ocho (8) de febrero del año dos mil catorce (2014), a las 12: 15 minutos del medio día, en la vereda la Moralia jurisdicción del municipio de Tuluá Valle, mi poderdante **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, fue detenido y privado de su libertad por funcionarios de la policía nacional, en cumplimiento a la orden de captura expedida el día 29 de julio de 2013, prorrogada por el juzgado 26 penal municipal con funciones de garantías de la ciudad



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

de Cali Valle, por existir motivos fundados que supuestamente lo inculcaban como parte integrante de la organizaci3n criminal denominada " **la rastrojos**", que operaba en el norte del valle.

QUINTO: El d1a nueve (9) de febrero de la misma anualidad, fue presentado ante el juzgado 21 penal municipal con funciones de garant1as de la ciudad de Santiago de Cali Valle, quien adelant3 las audiencias preliminares y le impuso medida de aseguramiento consistente en detenci3n preventiva en establecimiento carcelario, solicitada por la fiscal1a 18 bacrim de la ciudad de Cali Valle, por encontrarlo presuntamente responsable del delito de " **CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO**"

SEXTO: Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron la captura, tuvieron su origen seg1n se desprende de los audios que contienen las audiencias preliminares en el informe de investigador de campo de fecha ocho (8) de febrero de 2014, suscrito por los funcionarios de polic1a judicial **CARLOS ABERTO BETANCOURT** y **VIVIANA ANDREA MOLINA DUQUE**.

SEPTIMO: Le correspondi3 por reparto conocer del proceso al juzgado Tercero Penal del Circuito de la ciudad de Guadalajara de Buga Valle, a cargo de la doctora **MARIA EUGENIA CORREA RESTREPO**, quien fij3 fecha para el d1a 26 de diciembre del a1o 2014, con el objeto de impartir legalidad al preacuerdo realizado entre el anterior defensor, el procesado y la fiscal1a, ese d1a mi procurado **REVOC3** el poder inicialmente conferido al defensor p1blico que ven1a representando sus intereses y design3 como defensor de **CONFIANZA** al abogado **JOSE ORLANDO BETANCOURT GARZON**, quien una vez le fue otorgado el uso de la palabra en audiencia dej3 constancia que mi procurado **INGRESO A LA ORGANIZACION y EJECUTO LAS PRESUNTAS CONDUCTAS DELICTIVAS AL INTERIOR DE DICHA EMPRESA CUANDO ERA MENOR DE EDAD**, pues as1 se desprende de los elementos materiales probatorios que fincan en el proceso como son entre otros: Los interrogatorios de indiciados rendidos por **FABIO AGUDELO ECHEVERRY** el d1a 26 de junio de 2012, este manifest3 haber conocido a mi procurado, a quien se le conoc1a con el alias de **ternura** o **Andr3s** en el a1o 2008, quien andaba con un sujeto apodado "Piol1n".

Interrogatorio de indiciado del se1or **JOSE ANIBAL HERRERA VALLESTA**, rendido el d1a 9 de febrero de 2012, al manifestar que conoci3 a Juan Camilo quien lo apodaban **ternura** o **Andr3s**, durante los meses de octubre y noviembre de 2007.

Interrogatorio de indiciado del se1or **JOSE GERARDO BUEN BUENO**, rendido el d1a 9 de febrero del a1o 2011, todos estos sujetos integrantes de la banda criminal los rastrojos que operaba en el norte el valle.

La anterior petici3n fue avalada en su integridad por el delegado de la procuradur1a quien manifest3: "**... Una vez analizado los elementos materiales probatorios como entrevistas e informes de polic1a entre otros, se establece que las conductas delictivas desplegadas por CAMACHO OSPINA, al interior de la banda delincuencia1 "los rastrojos", fueron ejecutadas cuando aquel fuera un menor de edad, por tal motivo considera que el juzgado tercero penal del circuito especializado de Buga Valle, no es el competente para tramitar esta situaci3n, sino la jurisdicci3n de menores...**"

OCTAVO: Con base en lo anterior, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga valle profiri3 auto en el cual estableci3 previo an1lisis de los diferentes elemento materiales probatorios, que las supuestas conductas desplegadas por el joven



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA, fueron ejecutadas cuando este era menor de edad, razón por la cual dispuso que la competencia para tramitar esa actuación era de competencia exclusiva de la **Justicia de Infancia y adolescencia**, ordenando la **LIBERTAD INMEDIATA** de mi poderdante y remitiendo las diligencias al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, para dirimir la competencia de conformidad a lo preceptuado en el artículo 54 de la ley 906 de 2004.

NOVENO: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga Valle, mediante providencia del 27 de enero de 2015, aprobada por acta No 038, confirmó la decisión de primera instancia y ordenó remitir la investigación a los juzgados de menores de la ciudad de Tuluá Valle, reiterando el error en que se había incurrido por asignarle un asunto a un juez que carecía de competencia veamos: *"... Pues se acredita según la versión rendida por BUENO BUENO, visible a folio 168 del expediente que el procesado CAMACHO OSPINA, "ingresó a la organización a principios de 2008 tenía como cargo inicial patrullero..."*, en ese mismo sentido indica HERRERA BALLESTA alias "el mono costeño" que conoció al precitado procesado en el año "2007" con el remoquete de "TERNURA", primo de alias "PIOLIN" máximo comandante militar de los "RASTROJOS" y en calidad de "urbano del municipio de Trujillo Valle", manifestaciones que son respaldadas por AGUDELO ECHEVERRY alias "tata" al precisar que *"conozco alias TERNURA desde el 2008, donde lo conocí andando con PIOLIN que era tío de alias TERNURA..."*, Precisado *"que estando conmigo cumplió los 18 años de edad y ese día se le dio permiso para que saliera y después se fue"*.

Las anteriores versiones cotejadas con la experticia técnica de identificación plena realizada al procesado CAMACHO OSPINA, por el gendarme Carlos Andrés Sánchez Aldana, en el cual se concluyó que la cedula de ciudadanía del precitado enjuiciado "corresponde", y en la que se acredita que su fecha de nacimiento fue el "27 JUL 1992", y su preparación se llevó a cabo "04 AGO 2010", evidencia que al confrontarse con su ingreso a la organización criminal los rastros entre los años "2007 y 2008" y la no existencia de prueba que acredite hasta que tiempo estuvo vinculado a la misma, se establece que efectivamente el encartado perteneció a la citada empresa delictiva cuando era un menor de edad.

- Así las cosas concluye la sala, que la competencia para conocer de la presente actuación radica en la jurisdicción de infancia y adolescencia, que para el presente caso sería a instancia del Juzgado de Menores de la ciudad de Tuluá Valle, dado a que los hechos delictivos fueron desarrollados por el procesado en el Municipio de Trujillo Valle, jurisdicción que corresponde al referido despacho judicial; para lo cual se procederá su remisión al centro de servicios judiciales de la indicada localidad, a fin de que se surta su correspondiente asignación.

DECIMO: De lo anterior se concluye que la actuación adelantada por la Fiscalía y avalada por el Juzgado 21 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad Cali Valle, constituye una **FALLA EN EL SERVICIO PUBLICO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA**, por cuanto se profirió una providencia por medio de la cual se impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a un ciudadano, sin sujeción al ordenamiento jurídico vigente y sin acatar las normas que para tal efecto rigen esta clase de actuaciones, como lo era la ley 1098 de 2006, debiendo **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, soportar una medida de reclusión que lo privó de su libertad por espacio de 10 meses 18



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON

Abogado

Unidad Central del Valle del Cauca

Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420

Tuluá – Valle

días, sin tener el deber legal de soportar esta reclusión, como lo demanda el artículo 90 de nuestra Constitución Política, de tal suerte que esta providencia que lo puso tras las rejas se traduce en un **ERROR JUDICIAL**, que constituye como se dijo atrás una **FALLA EN EL SERVICIO**, que ocasiono que estuviese indebidamente privado de su segundo derecho fundamental como es la libertad, debido a la inadecuada valoración de los testimonios se pretendió ubicarlo dentro de una situación fáctica carente de pruebas como que **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, hizo parte de la organización criminal “los rastros” entre los años 2007 y mediados del año 2011, situación falsa que no tenía el sustento probatorio, es decir la fiscalía y el juzgado realizo un **INADECUADO** análisis de los supuestos motivos razonablemente fundados que tenían para solicitar y expedir sucesivamente la orden de captura y luego solicitar y decretar la medida de aseguramiento en su contra, afectando con ello no sólo su persona sino también su núcleo familiar, lo que lleva a determinar que el título de imputación ha de ser el **ERROR JUDICIAL**, que compromete la responsabilidad del Estado, tornándose la medida de aseguramiento de detención preventiva en desproporcionada, irracional, inadecuada, . Innecesaria, pues en este caso la medida a aplicar no era la de la ley 906 de 2004, sino las de la ley 1098 de 2006.

DECIMO PRIMERO: Mi poderdante **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA** al momento de su privación injusta de la libertad ostentaba un trabajo como agricultor, del cual dependían moral y económicamente sus demás miembros de la familia, por ser este el hermano mayor, ya que carecen de la figura paterna, por tal razón se vio gravemente afectada la subsistencia de su núcleo familiar por cuenta de una errada decisión judicial, nótese que **JUAN CAMILO** sostenía un hogar de 7 hermanos y a su madre, así mismo su entorno familiar fuera inicialmente estigmatizado por la comunidad donde vivía, irrogando con ello un inmenso perjuicio moral y económico, debido a que sin la presencia de **JUAN CAMILO**, se vieron avocados a la caridad de la comunidad, al punto de tener que recogerles dinero para el pago de un buen abogado.

IV. DEL TIEMPO DE DETENCIÓN DE LA VÍCTIMA DIRECTA DEL PERJUICIO.

El señor **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA** estuvo privado de su libertad en la cárcel del circuito de Buga Valle, por cuenta de las entidades demandadas desde el día 08 de febrero del año 2014, hasta el día 26 de diciembre de la misma anualidad, fecha en la cual se decretó la Incompetencia del Juzgado por cuanto la ocurrencia de los hechos materia de investigación se dieron en virtud de que el implicado era menor de edad y dispuso la libertad inmediata, decisión que fue confirmada por el Honorable Tribunal de Buga Valle.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Como consecuencia de la privación injusta de la libertad que hubo de padecer mi poderdante a raíz de las decisiones tomadas por las entidades demandadas se quebrantaron las siguientes disposiciones superiores y legales:

- Artículo 2, 6, 15, 21, 28, 29 y 90 de la Constitución Política de Colombia.



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

- Artículos 65, 66, 67, 68 y 69 de la ley 270 de 1996, **LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA.**
- **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS:** ley 74 de 1968, Artículo 9, numeral 5.
- **CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:** ley 16 de 1972, Artículo 10.
- Ley 906 de 2004, artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 y 15.

ARTICULO 2 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA

Con su actuar la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Cuarto penal municipal con funciones de garantías de Tuluá Valle, infringieron este precepto constitucional por cuanto, al ser las entidades públicas las encargadas de proteger la honra de los ciudadanos y de proporcionarlas condiciones más favorables a los seres humanos residentes en Colombia, para que sus derechos naturales y jurídicos sean respetados de manera indiscutible, no aseguró con su actuar que los deberes sociales del estado fueran tenidos en cuenta a favor de la convocante y su familia, sino por el contrario, fue mancillado su nombre, al privarla injustamente en su libertad, sin contar con las pruebas suficientes para derribar la presunción de inocencia que le asiste a todo ciudadano Colombiano.

ARTICULO 6 CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA.

"Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones" (resaltado es mío).

Los entes convocados incurrieron en omisión y extralimitación de funciones, la fiscalía general de la Nación y el Juez cuarto Penal Municipal con funciones de garantías omitieron su función, al permitir mantener la privada de la libertad sin contar con las pruebas suficientes para desmoronar el principio constitucional de la presunción de inocencia, pero en todo caso si en gracia de discusión se admitiera que no hubo tal omisión o extralimitación, se deberá tener en cuenta que en estos casos donde se debate la responsabilidad del estado de manera OBJETIVA es irrelevante el estudio de la conducta del juez o funcionario que participo en la imposición de la medida de aseguramiento, es decir, si hubo culpa o dolo al proferirla, porque no es la antijuridicidad de la conducta del agente del estado lo que se reprocha, sino la antijuridicidad del DAÑO sufrido por la víctima y en este caso es evidente que el tiempo de privación le irrogo unos perjuicios a ella y su núcleo familiar.



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

ARTICULO 21 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA.

"se garantiza el derecho a la honra, la ley señalará la forma de su protección"

Con el actuar irregular de las entidades convocada, se ocasionó un **DAÑO ANTIJURIDICO** en su honor a mi poderdante y a su familia, puesto que fue expuesta ante la sociedad capturada, sin tener sustento legal, ni constitucional para hacerlo más cuando sobre la actorarecaía el principio universal de **LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y DE LA BUENA FE**. Aun así, mi procurada fue mancillada moralmente en su honra y estigmatizada por la sociedad y señalada como una delincuente, sin razón jurídica para soportarlo.

ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA.

"toda persona es Libre. Nadie puede ser molestado en su persona y familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley"

Los entes convocados debieron de tener suma cautela al momento de proferir la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de mi defendida, puesto que no indagaron cual era la causa real por la que ella se encontraba en dicho sitio y en compañía de las dos personas que finalmente aceptaron responsabilidad por los delitos endilgados.

La libertad es el don máspreciado para el ser humano después de la vida en un estado social de derecho como el nuestro, la constitución de 1991 le da prelación a estos dos derechos fundamentales por encima de cualquier otro, quedando la persecución punitiva del estado relegada a otros de menor importancia constitucional.

La consagración de la responsabilidad del estado por la afectación de la libertad de los ciudadanos, obliga a los jueces y fiscales a asumir con total responsabilidad y celo la evaluación de los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento o dictar una orden de captura, pues una decisión de esta talla exige altos contenidos éticos.

ARTICULO 29 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

Ahora bien, con la privación de la libertad de la convocante, la fiscalía y el juez Cuarto penal municipal con funciones de garantías violaron todos los preceptos legales, ya que en las diferentes etapas procesales, tomo sus decisiones jurídicas basada en suposiciones, es decir el supuesto elemento de prueba sobre la cual se basó la medida de aseguramiento no existía.

ARTICULO 90 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables/ causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas"

Los entes estatales convocados causaron con su actuar un **DAÑO ANTIJURIDICO**, a mi poderdante, quien perdió una fuente de ingreso importante para el sustento de su hija menor.

Ahora con la decisión adoptada por la Judicatura de carecer de competencia para seguir con el conocimiento de la actuación, correspondiéndole esta competencia a la justicia de Infancia y Adolescencia y que como quiera que el acusado se encuentra privado de la libertad se dispuso su **LIBERTAD INMEDIATA**, mediante orden de libertad de fecha 26 de diciembre de



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON

Abogado

Unidad Central del Valle del Cauca

Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420

Tuluá – Valle

2014, firmada por la Juez **MARIA EUGENIA CORREA RESTREPO**, confirmada mediante decisión adoptada por el Honorable Tribunal Superior de Guadalajara de Buga Valle, Magistrado Ponente Doctor **LUIS ALBERTO PERALTA ROJAS**, aprobado y discutido en acta No 038 del 27 de enero de 2015, se resolvió definir que la presente actuación adelantada en contra del imputado **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA** es competencia de los Juzgados de Menores de Tuluá Valle y por tal razón se ordenó remitir la actuación a la oficina de apoyo judicial de la ciudad de Tuluá Valle para la correspondiente asignación, lo que a la postre confirmo la decisión adoptada del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga Valle, se configura el **DAÑO ANTIJURIDICO**, ya que la actora no tenía la obligación jurídica de soportarlo, pues no había razón legal para ser señalada como una delincuente y menos para que hubiera permanecido detenida por varios meses, sin importar la licitud o ilicitud de la conducta de los agentes del estado, lo que genera en el caso bajo examen una relación conflictual entre dos obligaciones del estado: la persecución del delito y la garantía de la libertad del ciudadano, en donde el derecho a la libertad personal debe ser preeminente frente al poder punitivo del estado, en caso de no ser así se corre el riesgo de cometer errores, razón por la cual el estado debe asumir este riesgo indemnizándolo solo a la víctima directa de la privación injusta sino a su grupo familiar. El concepto de **DAÑO ANTIJURIDICO**, implica que la responsabilidad patrimonial del estado no gravita en la antijuridicidad de la causa del daño, como ha sido la concepción tradicional, sino en la antijuridicidad del daño mismo; motivo por el cual, la causa del daño puede ser lícita, y, sin embargo, este devenir es antijurídico.

En consecuencia, no consideramos la legalidad o ilegalidad de la conducta de los entes demandados que capturaron, señalaron y ordenaron la prisión de la convocante, pues el daño antijurídico no supone la sanción a una conducta anormal de la administración, se debe advertir que en esta noción se desplaza del fundamento de la responsabilidad administrativa del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado, al concepto objetivo de la antijuridicidad del daño producido por ella.

Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de abril 4 de 2002, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez, expediente: 13.606.

"En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 90 de nuestra Constitución Política el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, de manera que si un sujeto es privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal y posteriormente liberado mediante providencia judicial en la que se resuelve desvincularlo del proceso penal, los daños que se demuestren y que deriven de la detención deben ser indemnizados, toda vez que no estaba en el deber de soportarlos.

No es necesario, generalmente, demostrar la existencia de una decisión errónea; conforme a lo expuesto, la sala encuentra que una providencia judicial proferida conforme a la ley que prevé y regula la detención preventiva, puede causar un daño antijurídico cuando en curso de la investigación penal no se desvirtúa la presunción de inocencia del sindicado que, en cumplimiento de dicha providencia, ha sido privado de la libertad, implica que la responsabilidad patrimonial del estado no gravita en la antijuridicidad de la causa del daño, como ha sido la concepción tradicional, sino en la antijuridicidad del daño mismo; motivo por el cual, la causa del daño puede ser lícita, y sin embargo, este devenir es antijurídico.

En consecuencia, no consideramos la legalidad o ilegalidad de la conducta de los entes demandados que capturaron, señalaron y ordenaron la medida de aseguramiento de la convocante, pues el daño antijurídico no supone la sanción a una conducta anormal de la administración, se debe advertir que en esta noción se desplaza del fundamento de la



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

responsabilidad administrativa del concepto subjetivo de la antijuridicidad de la acción del Estado, al concepto objetivo de la antijuridicidad del daño producido por ella.

El consejo de estado en sentencia de la sección tercera Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth, de fechada veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015) Expediente: 36390, Radicación: **270012331000200400683** 01, Actor: Jesús María Palacios Mosquera y otros, Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro, puntualizó lo siguiente:

Podemos advertir que la privación de que fue objeto **JUAN CAMILO CAMACHO** por parte de los entes demandados, fue **ABIERTAMENTE ARBITRARIA** y por consiguiente son responsables patrimonialmente por los perjuicios causados a su grupo familiar y a él como víctima directa de los hechos.

"...7. En efecto, al revisar el proyecto de dicha ley estatutaria, la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 199610, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, en estos términos: Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 60, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término "injustamente" se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (...). 9 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, exp. 20942, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 10 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible..."

LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA Ley 270 De 1996. Artículo 65.

Artículo 65: "El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del Inciso anterior, el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad"

Estamos ante una omisión de parte de la fiscalía general de la nación, pues sin haber recaudado elementos materiales suficientes, sin tener en consideración las cualidades personales del convocante, solicito ante el juez de control de garantías una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, el juez la decreto y lo más grave aún se mantuvo dicha medida por un periodo superior a seis meses, termino durante el cual no se recolectaron pruebas suficientes para solicitar condena en su contra, debiendo acudir como ultima ratio en aras de salvaguardar el derecho fundamental a la libertad a decretar por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga Valle la incompetencia, ratificada por el Honorable Tribunal Superior de Buga Valle, en el entendido de que para la comisión de los hechos materia de investigación **JUAN CAMILO** era



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON

Abogado

Unidad Central del Valle del Cauca

Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420

Tuluá – Valle

menor de edad, configurándose es supuesto de hecho que consagra la norma como es la privación injusta de la libertad.

EL consejo de Estado en sentencia 10.285 con ponencia del Consejero RICARDO **HOYOS DUQUE**, condeno al Consejo Superior de la Judicatura encontrando error judicial de hecho, y por ello afirmo:

El error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promoverla realización de las pruebas conducente para determinar el hecho que daría lugar a la apreciación del derecho. En efecto, lo que podemos llamarla intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso, o porque posteriormente se ha logrado probar un hecho que da lugar a la Absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión judicial errada. (Resaltado es mío)

ARTICULO 68 DE LA LEY 270 DE 1996.

Artículo 68: "Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios"

La responsabilidad se evidencia del **ERROR JUDICIAL** cometido por las entidades demandadas al solicitar e imponer una medida de Aseguramiento de detención preventiva a un ciudadano, cuando los hechos fueron cometidos cuando este era menor de edad, pues la norma este caso implica que la decisión de ordenar la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario este ajustada a la ley, es decir, que la medida impuesta sea la **PROCEDENTE** y en este caso no fue así, quedó establecido en los hechos de la presente actuación llevada a cabo el día 26 de diciembre de 2014 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga Valle, decretando la incompetencia para seguir juzgando a **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA** y confirmada el día 27 de enero de 2015 por el Honorable Tribunal Superior de Buga Valle, al remitir las actuaciones a los juzgados de menores de Tuluá Valle, demuestra que la Fiscalía no ejerció la acción penal conforme al canon constitucional 250, que la fiscalía no recolecto suficientes elementos materiales probatorios para imponer una medida de aseguramiento conforme a la ley, lo que conllevo reitérese a que se produjera un **DAÑO ANTIJURIDICO** que mi poderdante no está en la obligación legal de soportar.

Así mismo la constitución política de Colombia da plena respaldo al anterior artículo, según la sentencia de la corte Constitucional en su sentencia C- 528 de 2003. M.P. **MARCO GERARDO MONROY CABRA**.

"De manera mucho más enfática, el Artículo 68 de la ley estatutaria de la administración de justicia señala que "quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al estado reparación de perjuicios"; lo cual constituye un reconocimiento inequívoco de la aplicación del Artículo 90 de la Constitución en materia jurisdiccional En el mismo sentido el Artículo 69 destaca que "fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtenerla consiguiente reparación"

Consejo de Estado, sala del contencioso administrativo, sección tercera, consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, abril 4 de 2002, Radicación: 13606.



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

"La jurisprudencia del consejo de estado abunda en fallos donde se reconoce la responsabilidad del Estado por acción y omisión de las autoridades judiciales y se acepta que la privación injusta de la libertad constituye fuente de aquella. Las siguientes citas valen como ejemplo de dicha jurisprudencia:

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 90 de nuestra constitución política el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, de manera que si un sujeto es privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal y posteriormente liberado mediante providencia judicial en la que se resuelve desvincularlo del proceso penal los daños que demuestre y que deriven de la detención deben ser indemnizados /toda vez que no estaba en el deber de soportarlos.

Dicho en otras palabras, cuando una persona es privada de la libertad por virtud de una decisión de autoridad y luego puesta en libertad por la misma autoridad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, ya **SEA PORQUE EL HECHO IMPUTADO NO EXISTIÓ, O PORQUE EL SINDICADO NO LO COMETIÓ, O PORQUE EL HECHO NO ES PUNIBLE** ,además prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, ese daño es indiscutiblemente antijurídico y debe ser reparado por el Estado"(las mayúsculas son mías)

ARTICULO 65 y siguientes LEY 270 DE 1996

“CAPITULO VI

De la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales

ARTICULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. *El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.*

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

ARTICULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. *Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.*

ARTICULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. *El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:*

1. *El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.*

2. *La providencia contentiva de error deberá estar en firme.*

ARTICULO 68. PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. *Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”*

Como se puede observar del contenido del artículo 66 de la norma transcrita se dan los presupuestos del ERROR JUDICIAL demandado que le irrogo un perjuicio a JUAN CAMILO CAMACHO, al ser privado de su libertad por orden de una providencia de un funcionario judicial que se equivocó al imponer la medida, cuando en realidad esta clase de medida no operaba para el caso en comento.



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

PACTO INTERNACIONAL DEDERECHOS CIVILES YPOLITICOS:

Ley 74 de 1968, Artículo 9 numeral 5:

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá derecho efectivo a obtener reparación"

Los pactos internacionales firmados y ratificados por Colombia, son incorporados a nuestra legislación positiva y mientras subsistan deben ser acatados y respetados por las autoridades de los estados contrayentes, la ley 74 de 1968, aún se encuentra vigente y se solicita sea aplicado en el presente proceso de manera preferente, pues como se demostró la detención injusta a que fue sometido señor **JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA**, debe ser reparada económicamente, ya que desde el comienzo de la investigación la fiscalía incurrió en errores judiciales e irregularidades procedimentales.

CONVECION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Ley 16 de 1972.

El Artículo 93 de la Constitución Política de Colombia señala que los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso **PREVALECERAN** en el orden interno, en tal virtud, tiene una jerarquía superior a la ley, lo que supone que su vigencia y aplicación no dependen que sus regulaciones sean o no acogidas por leyes internas del país tratante en tanto hayan sido ratificados, entonces señor procurador como sustento a nuestras pretensiones pedimos sean aplicado las protecciones contenidas en este tratado.

VI. PRUEBAS

Para que se tengan como pruebas dentro de este proceso, respetuosamente me permito solicitarle al señor juez decreten y practiquen las siguientes:

6.1. DOCUMENTALES

6.1.1 Constancia de no conciliación expedida por la procuraduría 59 Judicial I, para asuntos administrativos de Cali Valle.

6.1.2.Registro civil de nacimiento de los señores y menores**JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA, XIOMARA FRANCO CAMACHO, CAMILA CAMACHO OSPINA, VALERIA ACEVEDO CAMACHO, BRAYAN DAVID CAMACHO OSPINA, ISABELA CAMACHO OSPINA;** y **DUVAN ANDRES CAMACHO OSPINA**, incluyendo sumadre y sus hermanos.

6.1.3. Certificación de honorarios del Abogado a nombre de **JOSÉ ORLANDO BETANCOURT GARZON.**

6.1.4. Constancia de la cárcel sobre el tiempo que estuvo detenido el demandante.

6.1.5. Copia audio (DVD) que contiene audiencias preliminares llevadas a cabo el día 09 de febrero de 2014, adelantadas por el Juzgado 21 Municipal con Función de Control de Garantías de Cali Valle.

6.1.6. Copias auténticas de las actuaciones que contiene entre otras la decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga Valle y decisión del Honorable Tribunal Superior de Buga Valle (constante de 22 folios), entregadas por la Fiscalía.



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

6.1.7. Informe de visita socio-familiar efectuado por la comisaria de familia de Tuluá Valle (constante en 4 folios).

6.2. PRUEBA TRASLADADA.

Solicito se oficie a los siguientes entes públicos: - Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga Valle, con el fin de obtener el audio y copia del acta de audiencia celebrada el día 26 de diciembre de 2014, caso JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA radicado 11-001-60-00000-2013-00400.- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga Valle Sala Penal con el fin de obtener el audio y copia de la decisión y el acta de audiencia celebrada el día 27 de enero de 2015, caso JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA radicado 11-001-60-000-2013-00400-01. – Fiscalía 47 Seccional de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Tuluá Valle con el fin de obtener copia íntegra del proceso radicado 76-834-60-00000-2103-00400, caso JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA y que llegara de la Fiscalía 18 Bacrim de Cali Valle en el radicado 11-001-60-00000-2013-00400.- Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la ciudad de Tuluá Valle, con el fin de obtener audio y copia del acta de audiencia celebrada el día 26 de diciembre de 2014 Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga Valle y audio y copia de la decisión y el acta de audiencia celebrada el día 27 de enero de 2015 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga Valle Sala Penal, caso JUAN CAMILO CAMACHO OSPINA, lo anterior por cuanto no se ha podido obtener por parte de este apoderado judicial los respectivos audios y actas debido al movimiento del proceso y la reserva legal por tratarse de un proceso en contra de un menor.

VII. CUANTÍA Y COMPETENCIA

Es usted competente conforme a la cuantía expuesta en el acápite de las pretensiones, además por la naturaleza del asunto y domicilio de las partes, el carácter de la petición, el lugar de los hechos y conforme lo establecido en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia.

VIII. FUNDAMENTOS LEGALES

Esta demanda se fundamenta en lo establecido en los artículos 86, 132 numeral 6, 136 a 139, 206 y siguientes del C.C.A.; y, en las disposiciones citadas en el acápite de las normas violadas y concepto de la violación.

IX. ANEXOS

Poderes a mi conferidos, lo enunciado en el acápite de pruebas documentales, Copia de la demanda con los anexos para la Fiscalía, Rama Judicial, Ministerio Público y copia para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y copia simple para el archivo del despacho, CD que contiene la demanda.



MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON
Abogado
Unidad Central del Valle del Cauca
Carrera 25 No. 16-50 – Tel. 3008127420
Tuluá – Valle

X. NOTIFICACIONES

LAS ENTIDADES DEMANDANDAS:

1-Al señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial-Consejo Superior de la Judicatura, en la ciudad de Cali, en la dirección seccional en la carrera 10 No 12-15, palacio de justicia Cali, correo electrónico: desajdinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.

2-Al señor Fiscal General de la Nación **NESTOR HUMBERTO MARTINEZ** o quien haga sus veces diagonal 22B #52-01 BUNKER en Bogotá, o su representante en la ciudad de Cali Dirección Seccional de Fiscalías.

3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recibirá notificaciones personales en la calle 70 No. 4-60 de Santa Fe de Bogotá D. C. correo buzonjudicial@defensajuridica.gov.co.

4-La parte actora y los poderdantes recibiremos notificaciones a través del suscrito, en la secretaria del despacho o en mi oficina particular ubicada en la Carrera 25 No. 16 – 50 Tuluá Valle, teléfono 300-812-7420, correo buri.11@hotmail.com

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL BURITICA GARZON.

C.C. 16.540.270 de Zarzal Valle.

T.P. 125.089del Consejo Superior de la Judicatura